«EL MINISTERIO FISCAL COMO ORGANO Y PARTE EN EL PROCESO PENAL CON TRIBUNAL DE JURADOS»*

MIGUEL GUTIERREZ CARBONELL

Fiscal de Audiencia,
Profesor-Colaborador del Depto. D. Procesal,
Secretario Tribunales, Excedente.

* El presente trabajo es el texto íntegro de la Comunicación presentada al II Congreso de la Asociación de Fiscales, celebrado en diciembre de 1982. Las conclusiones formuladas en esta Comunicación fueron aprobadas por la correspondiente Comisión de Trabajo y Pleno del Congreso.

I.—JUSTIFICACION DEL TEMA.

El art. 125 de la Constitución reinstaura «...el Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine», como una de las posibles manifestaciones de la participación popular en la Administración de Justicia (arts. 1-1 y 2 y 117-1 Const.).

La Ponencia a la que se presenta esta Comunicación se intitula «El Ministerio fiscal y los procesos». El comunicante estima que un planteamiento, actual y realista, con proyección de inmediato futuro, sobre dicho tema, no puede, ni debe, verificarse pasando por alto la problemática del Jurado. Tema profundo, ideológica, sociológica, orgánica y procesalmente.

Esquemáticamente, por razón de tiempo y espacio, esbozaremos nuestras provisionales meditaciones sobre el tema de «La posición del Ministerio Fiscal ante el proceso penal con Tribunal de Jurados».

II.—ACOTACIONES PREVIAS: PREMISAS Y OBJETIVOS DEL PRESENTE ESTUDIO.

Partimos de la Constitución, pero la realidad evidencia que ésta tiene diversas lecturas; simplificando: una conservadora y otra progresista.

Y lo que importa es desentrañar la voluntad constitucional, adecuada a la realidad social.

Y así, desde una óptica que reputamos progresista de la Constitución, partimos, en el hilo de nuestro razonamiento desde las siguientes PREMISAS:

A) El Poder Legislativo está constitucionalmente obligando a promulgar una Ley sobre el Jurado. El art. 125 Const. es vinculante, no simplemente programático.

B) Dicha Ley deberá tener rango de orgánica (arts. 81, 122 y 24-2 Const). Parece aconsejable que en la propia L.O.P.J. se fijen, al menos, las líneas maestras de nuestro futuro Jurado.

C) La letra, y el espíritu, del art. 125 Const. posibilitan diversas alternativas para la regulación del Jurado, en los procesos penales. Sistema de Jurado en sentido técnico o estricto (Jueces legos para hechos y técnicos para derecho), o modalidad de Escabinato (ambos tipos de Jueces resuelven, conjuntamente, sobre hechos y derecho). El Derecho comparado sanciona ambos sistemas; hay una tendencia hacia el Escabinato en Europa occidental (Francia, Italia, República Federal Alemana) y una preferente inclinación hacia el Jurado, en el derecho anglosajón. La reciente doctrina procesal española se decanta hacia el Escabinato (Gimeno Sendra: «El artículo 125 de la Constitución, los Tribunales de Jurados y de Escabinos»). No vamos a terciar, aquí y ahora, en la interesante polémica; quede constatado como datos objetivos.

D) El espíritu informador de la Constitución (voluntad constitucional) no prohíbe, ni impide, la adopción del sistema del Escabinato para otros órdenes jurisdiccionales distintos del penal, con respecto a determinados tipos concretos de procesos (cuestiones de relevancia pública o social, intereses difusos de una colectividad... (Arts. 1-1, 117, 122-1 y 125 Const.).

Pero los concretos OBJETIVOS de la presente comunicación son, paradójicamente, más ambiciosos y más modestos.

No se trata, tampoco es posible pues no está promulgada la Ley, ni en fase de Proyecto, de llevar a cabo una relación pormenorizada de la intervención y funciones del Fiscal en el proceso penal ante Jurados. En su día habrá que hacerla.

Lisa y llanamente el fin perseguido es la apertura de un amplio debate, ahora, entre nosotros, sobre una toma de posición: La que corresponde al Ministerio Fiscal, como institución constitucional, frente al desarrollo del principio de la participación popular en la Administración de Justicia. Y de forma más concreta investigar conjuntamente, las líneas generales de la filosofía y de la práctica, del Fiscal, como órgano y como parte procesal, en su intervención en los procesos penales celebrados ante Jurados.

La oportunidad del tema se justifica por la imperativa declaración constitucional de su creación y por el larvado lastre negativo que el Jurado ha tenido ante la Justicia técnica.

III.—¿UN PESIMISMO JUSTIFICADO?

La historia del Jurado en España es tristemente aleccionadora. Ha habido una clara enemiga o una sedicente reticencia contra los jurados. Se les negó, abierta o encubiertamente, la autoridad, el prestigio, el reconocimiento igualitario de su condición de jueces del pueblo; no se atendió a sus necesidades económicas (dietas).

La objetiva lectura de la prensa, de las crónicas judiciales, de las Memorias de la Fiscalía del T. S.—laudatorias y críticas—nos lleva fácilmente a tal conclusión.

Pero esto ya es historia. Nos importa más determinar cuál es, actualmente, la posición de los ciudadanos, de una parte, y de otra, de la llamada Justicia Técnica (Jueces y Ficales) frente a la reinstauración del Jurado.

No se trata de mera curiosidad especulativa. Importa saber, si quienes han de actuar, conjuntamente con el Jurado, creen, o no, en el mismo.

Los estudios de sociología empírica publicados sobre tema son provisionales y modestos.

A) «ACTITUDES DEL PUEBLO ANTE EL RESTABLECIMIENTO DEL JURADO» (encuesta realizada entre ciudadanos no juristas)

DATOS GENERALES:

El 9 % — En oposición.

El 48 % — A favor.

El 35 % — No contesta.

Esta aceptación del Jurado es más alta entre los más jóvenes y los votantes de partidos de izquierda».

También se les preguntó: ¿Qué prefiere ser juzgado por Tribunal con Jurado o por Tribunal compuesto exclusivamente por Jueces profesionales?

El 45 % — Por Tribunal con Jurado.

El 18 % — Por Jueces profesionales.

El 37 % — No responde.

Esta preferencia es más intensa entre:

- Individuos ideológicamente más a la izquierda.
- Personas más jóvenes.
- Personas que han tenido contacto con el mundo de la Justicia».

(Datos tomados de la Memoria del C. G. P. J. de 1982, en su resumen relativo al «Informe sobre las actitudes de los españoles ante la Administración de Justicia»).

La conclusión es clara. Mayoritariamente, el pueblo, encuestado, se manifiesta en favor de la reinstauración del Jurado.

B) ACTITUDES DE LOS JUECES DE CARRERA, ANTE EL RESTABLECIMIENTO DEL JURADO.

- Muy negativa 76 %
- Negativa 8 %
- Intermedia 3 %
- Positiva 8 %
- Muy positiva 5 %

(Datos tomados del Libro «El Juez Español» de J. J. Toharia, encuesta de 1972. Recientemente el Departamento de Sociología de la Universidad de Zaragoza ha realizado un trabajo sobre «El funcionamiento del Poder Judicial visto por sus protagonistas», no lo hemos podido manejar, pero según se nos ha informado viene a coincidir, básicamente, con los datos arriba reflejados).

La comparación es elocuente. Una mayoría abrumadora de la Carrera Judicial (dos tercios) se manifiesta claramenté contraria a la reinstauración del Jurado.

Y la experiencia histórica nos demuestra que esto es gravemente peligroso. Porque «buena parte de las dificultades que la institución del Jurado conoció se debieron no ya a su naturaleza o a la de la sociedad española, sino a la reticente actitud que, respecto al mismo (y por razones distintas) mantuvieron sectores tan decisivos como el Gobierno central, las clases medias y los miembros de las carreras judicial y fiscal» (Toharia).

«La hostilidad de la Judicatura hacia el Jurado se hizo patente desde los primeros intentos de introducción. Tradicionalmente, parece haber sido más acusada entre los fiscales...».

Un miembro de la propia carrera judicial calificaba la actitud general de los Magistrados respecto de los jurados «como de indisimulada displi-cencia, cuanto no desprecio; se los tenía esperando, a veces durante horas, en fríos pasillos, se les daba un trato distante y protector...» (Saiz Gómez, citado por Toharia).

Posiblemente no fue muy distinta la reacción general del Fiscal ante el Jurado.

Comúnmente se afirma que las Memorias de la F. T. S. son críticamente negativas frente al Jurado. Estimo que no debe generalizarse, en la mayoría de ellas se advierte «una constante llamada de atención sobre los defectos de la Ley del Jurado que había que corregir» (J. A. Ale-jandre, «La Justicia Popular en España»). Pero hay Memorias de claro signo defensor del Jurado (p. e.: La de 1898, de Felipe Sánhez Román; la de 1923, de José Llado y Valls, la de 1924, de Galo Ponte y Escartín...), aunque existen otras de rotunda oposición a dicha institución.

En todo caso, este es un material escasamente estudiado y que debería serlo, con visión de futuro.

Importa, pues, y mucho, crear un clima favorable a la reinstauración del Jurado; disipar los prejuicios contra el mismo; superar el pesimismo derrotista de las precedentes experiencias. Importa sobre todo al Fiscal, por sometimiento y fidelidad a la propia Constitución.

V.—LA PRAXIS DEL FISCAL COMO ORGANO Y COMO PARTE EN LOS PROCESOS PENALES ANTE JURADO.

Pese a las naturales dificultades por la carencia tanto de texto legal como de Proyecto, no resulta aventurado, ni ocioso, meditar sobre las líneas generales de la posición del M. F. en el tema enunciado. Porque el Jurado, en cualquiera de sus posibles modalidades, comportará un

cambio notable, una puesta al día, en la actuación del M. F. La dinámica del nuevo proceso, exigirá una mentalidad distinta, con estilo y método de trabajo más fluidos.

En principio, y de raíz, conviene dejar bien sentado lo siguiente. El Jurado es una institución consagrada constitucionalmente; es Poder Judicial y precisamente el que encarna de manera más directa la soberanía popular de la que emana la Justicia.

Por tanto, al margen de cualquier valoración personal de tipo científico, siempre respetable, al Ministerio Fiscal como institución constitucional, le corresponde velar el prestigio (respeto), eficacia e independencia del Jurado (arts. 117 y 125 Const., en relación con el art. 3, uno a tres, del Estatuto Orgánico del M. F. de 30-12-81).

Lograr que tal principio o filosofía se asuma como realidad vivida debe ser tarea prioritaria.

El Fiscal, como órgano, debe tener una intervención, activa y decidida, no puramente formularia, en la compleja fase previa de la formación del Jurado, de acuerdo con las facultades que le atribuya la futura Ley. Nos estamos refiriendo a la capital intervención que puede tener, en evitación de corruptelas, en la formación de las listas de Jurados, en los trámites preparatorios para la constitución del Tribunal lego, recusaciones, persecución del absentismo, petición y ejecución de sanciones... El celo de un Fiscal, no pasivo, debe contribuir al eficaz funcionamiento de la constitución del Tribunal de Jurados.

Y también, al Fiscal como parte procesal, le corresponderá una importante tarea que requiere un nuevo enfoque.

La prueba, practicada íntegramente en el Juicio Oral—hoy, en ocasiones, mera formalidad—exigirá una participación más activa del Fiscal. Por tanto, desde la fase sumarial, el Fiscal, como una parte procesal más, deberá intervenir en la investigación instructora diligentemente.

La articulación de la prueba en el escrito de calificación (o trámite equivalente) será fundamental.

Un punto crucial que deberá ser objeto de especial atención es el relativo a la retirada de acusaciones. Deberán buscarse fórmulas que permitan, con racional flexibilidad, tal retirada acusatoria.

En tal sentido las estadísticas de la época del Jurado son aleccionadoras. Así, «el porcentaje medio de sentencias acordes con las peticiones del Fiscal es básicamente la misma (en los juicios celebrados con Jurado, o sin, entre 1891 a 1932): 54'8 % en los juicios con Jurado y el 57'9 %, en los efectuados sin Jurado». Sin embargo en dicho período «el promedio de asuntos terminados por retirada de la acusación pública resulta ser del orden de un 11'3 % en los juicios sin Jurado». (Datos tomados de Toharia).

Resulta fácil sacar dos conclusiones. Primera, el Jurado no fue más benigno que el Tribunal técnico. Segunda, el Fiscal tenía que preparar cuidadosamente sus pruebas; no acusaba sin pruebas, racionalmente suficientes.

La médula de la actuación ante el Jurado es el Juicio Oral; por tanto hay que revalorizar sus principios informantes (oralidad, intermediación, publicidad, concentración...).

Pese a los buenos propósitos de la Ley E. Cri. «nuestros Jueces han adquirido el hábito de dar escasa importancia a las pruebas del plenario, formando su juicio por el resultado de las diligencias sumariales...», se decía ya en su E. M.—, hoy día, el juicio oral suele convertirse en una práctica mecánica y rutinaria.

Ante el Tribunal de Jurados el juicio oral recuperará su cabal importancia. No se caerá en el formulismo de la reproducción sumarial (p. e., en la prueba documental, arraigado vicio contrario al art. 741 L. E. Crim.). Por tanto, las pruebas deberán practicarse plenamente ante el propio Tribunal; de ahí la importancia de su articulación y práctica, por el M. F. Ante el Jurado hay que probar, plenamente, sin remisiones al sumario (salvo para señalar contradicciones) la realidad de los hechos, base de la acusación.

El informe del Juicio Oral deberá tener un tratamiento distinto del actual. En cuanto a los hechos y valoración de la prueba, el Fiscal se dirige, fundamentalmente, a un Tribunal lego. Su lenguaje será claro, sencillo, directo, asequible a profanos en derecho. Y así se cumplirá, también otra función importante del juicio oral, hoy olvidada, su valor moralizante, de aproximación de la justicia al pueblo.

Por último, le corresponderá al Fiscal, como parte, la interposición de los recursos procedentes, tratando de adecuar las sentencias, por vía impugnatoria, tanto a la verdad material, como al sentimiento popular de la justicia.

Una participación activa del Ministerio Fiscal en la línea expuesta contribuiría positivamente al logro de un anhelado deseo «el paso de una Justicia autoritaria a otra consentida y refrendada por la propia Sociedad» que a través del Jurado, ejerce su soberanía, participando, directamente, en el Poder Judicial (Gimeno Sendra, «Fundamentos del Derecho procesal»).

VI.—CONCLUSIONES.

- 1.^a—El Jurado es una institución consagrada constitucionalmente.
 - 2.^a—El Poder Legislativo está obligado a promulgar la Ley del Jurado, en desarrollo del art. 125 Const.
 - 3.^a—El proceso penal ante Jurados requiere una intervención del Ministerio Fiscal, distinta de la actual, más activa, directa y flexible.
 - 4.^a—A distintos niveles (orgánico y asociativo) deberían propiciarse trabajos tendentes a:
 - a) Estudiar las ventajas e inconvenientes de las distintas modalidades de Jurado (en sentido técnico o Escarbinato).
 - b) Estudiar las memorias de la F. T. S. sobre el Jurado.
- Realizar actos de debate y divulgación sobre el Jurado, dirigidos a contrarrestar los prejuicios históricos de la Justicia técnica contra el mismo y encaminados a rodear de autoridad y prestigio a aquella institución tan necesarios para su eficaz funcionamiento.